

68

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCION SEGUNA**

Bogotá, D.C., 26 OCT 2018

PROCESO: 110013331-021-2018-00141-00
DEMANDANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
- COLPENSIONES
DEMANDADO: ELVIRA BARRERA

Entra al Despacho el MEDIO DE CONTROL DE LESIVIDAD, instaurado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en contra de la señora ELVIRA BARRERA, para resolver la medida cautelar presentada por la parte actora.

I.- MEDIDA CAUTELAR DE LA SUSPENSION PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO.

El apoderado Judicial de la parte actora – ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, presenta MEDIDA CAUTELAR (fls. 2 al 3) de suspensión provisional de los efectos de la Resolución VPB61498 del 16 de septiembre de 2015, mediante la cual, se resolvió recurso de apelación contra la Resolución Nª GNR 314166 del 9 de septiembre de 2014, revocando dicha decisión y reliquidando la prestación en cuantía de \$1.468.250.00, con efectividad a partir del 26 de febrero de 2011, donde se ingresaron factores salariales no certificados en formatos CLEBP, aplicando el 85% del IBL que corresponde a \$1.727.353, de conformidad con la Ley 100 de 1993, sin ajustarse a derecho.

Sustenta que la resolución cuestionada es contraria al ordenamiento jurídico ya que para el reconocimiento de la prestación con Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta los tiempos y factores salariales cotizados única y exclusivamente por entidades públicas, sin que sea posible sumar los salarios y factores salariales de las entidades públicas y privadas; una vez reliquidada la prestación se observa que se tuvieron en cuenta tiempos públicos a partir del 3 de abril de 1991 hasta el 30 de junio de 1994, los cuales no se encuentran certificados, lo que generó un valor errado en la mesada y en el régimen aplicado ya que se tuvieron en cuenta para la reliquidación, atentando la resolución contra el principio de estabilidad financiera.

II. DEL TRÁMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR:

Mediante auto de fecha 20 de abril de 2018 (fls. 18 al 19), se ordenó correr traslado a la señora ELVIRA BARRERA, por el término de cinco (5) días, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 233 del C.P.A.C.A., y S.S., notificación que fue remitida por el Despacho a través de la oficina de apoyo judicial con los anexos para la contestación correspondiente, sin embargo no pudo ser realizada dicha notificación, por lo que a través de auto de fecha 29 de junio de 2018 (fls. 48 al 49), se ordenó a la entidad agotar la notificación en los términos establecidos en los artículos 200 del C.P.A.C.A., y los artículos 291, 292 y 293, y mediante auto de fecha 7 de septiembre de 2018 (fol. 61), se ordenó la notificación por aviso.

Finalmente la notificación de la medida cautelar fue efectuada el día 5 de octubre de 2018 (fol. 62a), a señora ELVIRA BARRERA VIUDA DE LOZADA, quien mediante escrito de fecha 12 de octubre de 2018 (fls. 63 al 64), procede a descorrer el traslado ordenado, donde indica lo siguiente:

Afirma que no debe ser decretada la medida cautelar porque COLPENSIONES no sustentó en debida forma la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable al interés público, pues la entidad únicamente se

limitó a expresar el monto de la pensión reconocida, sin un estudio de impacto fiscal que le implica a la entidad el pago de dicha pensión,

De la misma forma manifiesta que COLPENSIONES no sustentó que existen serios motivos para considerar de que no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serian nugatorios.

Por lo anteriormente considerado, solicita no acceder a la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo que presentó COLPENSIONES, al no cumplir con los requisitos generales y específicos previstos para tal fin.

III. PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

El artículo 230 del C.P.A.CA., las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Dentro de las medidas cautelares que podrán ser adoptadas por el Juez, se encuentra la establecida en el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.CA, la cual, se refiere a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo. Sin embargo, para la adopción de dicha medida, se requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la norma ibídem, el cual a la letra dice:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares.
*Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por **violación de las disposiciones invocadas** en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.*
Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (subrayado fuera de texto)

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos: (...)

Planteado lo anterior, se tiene, que el C.P.A.C.A. en el numeral 3 del artículo 230 contempló como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos, la que se encuentra condicionada a que el acto acusado contrarie de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores; violación que se debe constatar con el simple cotejo de las normas que se confrontan o mediante documentos públicos aducidos en su solicitud, pues al requerirse un estudio de fondo, el juez debe agotar el procedimiento y diferir el pronunciamiento sobre la validez del acto acusado para el momento en que se dicte sentencia.¹

Bajo los presupuestos enunciados con anterioridad, se absolverá la medida cautelar deprecada por la parte actora.

La solicitud de medida de suspensión provisional presentada tiene sustento que con la expedición de la Resolución VPB61498 del 16 de septiembre de 2015, mediante la cual, se resolvió recurso de apelación contra la Resolución N^a GNR 314166 del 9 de septiembre de 2014, revocando dicha decisión y reliquidando la prestación en cuantía de \$1.468.250.00, con efectividad a partir del 26 de febrero de 2011, donde se ingresaron factores salariales no certificados en formatos CLEBP, aplicando el 85% del IBL que corresponde a \$1.727.353, de conformidad con la Ley 100 de 1993, sin ajustarse a derecho.

Sustenta que la resolución cuestionada es contraria al ordenamiento jurídico ya que para el reconocimiento de la prestación con Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta los tiempos y factores salariales cotizados única y exclusivamente por entidades públicas, sin que sea posible sumar los salarios y factores salariales de las entidades públicas y privadas; una vez reliquidada la prestación se observa que se tuvieron en cuenta tiempos públicos a partir del 3 de abril de 1991 hasta el 30 de junio

¹ C.E. , Auto 21845 fe.7/2002 M.P. Alíer Eduardo Hernández Enríquez

70

de 1994, los cuales no se encuentran certificados, lo que generó un valor errado en la mesada y en el régimen aplicado ya que se tuvieron en cuenta para la reliquidación, atentando la resolución contra el principio de estabilidad financiera.

Sea lo primero señalar frente a la solicitud de medida cautelar invocada, que la parte actora - COLPENSIONES no dio cumplimiento en su integridad a lo establecido en el artículo 231 del C.P.A.C.A., norma en la cual se fijan los requisitos a efectos de proceder al decreto de dichas medidas; lo anterior, debido a que la entidad demandante únicamente en su escrito se basó en explicar la procedencia del decreto de medidas cautelares, la finalidad de las mismas y, el desarrollo normativo, omitiendo desarrollar e indicar cuales eran las razones que llevaron a atacar por vía de nulidad la legalidad de los actos administrativos censurados, es más tampoco desplegó una actuación propia que dejara claro de dónde devenían los valores presuntamente liquidados de más y, la diferencia que se solicita, pues en lo único que se soportó el escrito, fue en indicar que se habían incluido unos tiempos que no correspondían a los certificados en formatos CLEBP.

Es así que de la simple lectura de los textos jurídicos citados como base de la solicitud y el contenido de los actos administrativos acusados, no se puede llegar a concluir que el mismo no se ajusta a la legalidad, pues exige entrar a valorar el material probatorio arrimado al expediente, entre otras cosas, porque la entidad en su escrito no presenta de forma clara una liquidación en la que se indique en qué medida fue afectada la prestación al calcular unos tiempos que no corresponden y, si existe un incremento o no el IBL, además se deberá entrar a determinar cuál es la normatividad aplicable al caso concreto, para verificar como debe liquidarse la pensión y, si en esta medida es posible liquidarla o no con tiempos mixtos, para lo cual, será necesario para el Despacho recaudar todo el material probatorio y, entrar a valorar el mismos, a efectos de determinar si existen valores cancelados de más.

En consecuencia, los presupuestos antes enunciados requieren de una valoración de las pruebas aportadas con el curso del proceso, lo cual, es una actividad propia de la sentencia, además es allí cuando debe definirse, como producto del debate que necesariamente debe surgir entre las partes, la capacidad de los documentos aportados en la demanda para desvirtuar la legalidad de los actos acusados, es decir, como la ilegalidad no surge a simple vista, como es la naturaleza de la medida cautelar, no es dable predicar una violación flagrante, de bulto, o prima facie, razón por la cual, se resolverá en forma adversa la medida cautelar solicitada.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional de suspensión provisional de los efectos de la Resolución VPB61498 del 16 de septiembre de 2015, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese por estado esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

catc

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCION SEGUNDA

EL AUTO ANTERIOR SE NOTIFICA A LAS PARTES
EN ESTADO ELECTRONICO No. 44 A TRAVES DE LA PAGINA
WEB WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO, HOY 9 DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), A LAS 8:00 A.M.


SECRETARIO

9 OCT 2018